



Restitución de Tierras

3

Balance de las recomendaciones anteriores

En el periodo pasado, Australia, Bolivia y El Togo valoraron positivamente la existencia del andamiaje legal e institucional en materia de restitución de tierras y dos de ellos hicieron énfasis en la importancia de fortalecer la reparación colectiva.

Por su parte, El Salvador, Francia, Australia, Estado Plurinacional de Bolivia y Haití se enfocaron en la necesidad de continuar con la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mejorar la eficacia de los procedimientos de restitución de las tierras despojadas durante el conflicto y en aumentar los recursos de las instituciones competentes. También hicieron énfasis en la importancia de garantizar los derechos territoriales a los pueblos indígenas, los campesinos y demás personas que trabajan en las zonas rurales, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las autoridades y organizaciones afrocolombianas y prestarles asistencia en sus demandas colectivas en relación con la restitución de sus tierras.

Aunque el proceso de restitución de tierras constituyó un hito en la garantía y la protección de los derechos de las víctimas de despojo, desplazamiento y abandono forzado en el país, doce años después de expedida la Ley 1448 de 2011 es necesario trabajar enfáticamente en las dificultades que se han detectado.

Desafíos

Se han proferido 6.998 sentencias de restitución por la ruta individual en 26 departamentos, y se ha ordenado restituir y/o compensar un total de 183.466 hectáreas durante los últimos diez años.

Cifra importante, pero baja en comparación con los 6 millones de hectáreas que se calculan despojadas durante el conflicto armado. Igualmente, jueces de restitución de tierras han proferido 33.999 órdenes de restitución de derechos, de las cuales se mantienen incumplidas 19.046 que corresponde al 56 % (1). Como aspecto positivo se destaca el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos y la creación de la jurisdicción agraria en el primer semestre de 2023.

Persisten varias dificultades que no permiten que se materialice efectivamente el derecho de restitución de tierras en Colombia.

Los cuellos de botella se encuentran presentes en todas las etapas que componen el proceso de restitución, desde su etapa inicial que se surte ante la Unidad de Restitución de Tierras, la etapa judicial ante jueces y magistrados, y durante la denominada “etapa posfallo”, ante entidades, jueces y magistrados encargados del cumplimiento de la sentencia.

(1) Comisión de Seguimiento y monitoreo a la Ley de víctimas y restitución de tierras, IX Informe de Seguimiento, 2022

Los obstáculos que se han identificado en el proceso de Restitución de Tierras actualmente tienen que ver con:

- i) las barreras impuestas por parte de administraciones anteriores en la Unidad de Restitución de Tierras, durante la etapa inicial del procedimiento de restitución;
- ii) la mora judicial en el avance de los casos de restitución con ocasión de diversos factores como la congestión judicial; (2)
- iii) la desidia y la falta de voluntad política de órganos directivos y de funcionarios de entidades estatales, en anteriores gobiernos al actual, para tramitar asuntos de su competencia en el marco de los procesos judiciales o en la “etapa posfallo”;
- iv) la omisión en la adecuación presupuestal por parte de las entidades con órdenes a cargo en las sentencias de restitución,
- v) la existencia de procesos internos en las entidades que ignoran el contexto de los casos y que ralentizan el cumplimiento de las órdenes.

La Corte Constitucional a través de la sentencia T-341 de 2022 reconoció la mora judicial de dichos procesos, la cual contribuye a la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos, pues además no hay sanciones a los responsables del despojo y desplazamiento de las víctimas que reclaman por sus tierras.

Incluso, en esta misma sentencia, la Corte reconoció que para los derechos territoriales de las comunidades indígenas “la respuesta estatal no superó las situaciones que fomentan la inseguridad tanto jurídica como material sobre los territorios”.

Es inaplazable avanzar en el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016 y en la implementación de la reciente Jurisdicción Agraria (3), pues esta abre la puerta para integrar lo avanzado en materia de restitución y garantizar la continuidad de este derecho para todas las personas víctimas de despojo y abandono.

(2) Justificada (producida por factores como la sobrecarga y la congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad o la falta de diligencia).

(3) Min Agricultura. “Colombia tendrá jurisdicción agraria: Congreso aprueba definitivamente el proyecto que la crea”. 13 de junio de 2023. Disponible en: <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-tendr%C3%A1-jurisdicci%C3%B3n-agraria-Congreso-aprueba-definitivamente-el-proyecto-que-la-crea.aspx>

Recomendaciones

1. Que prevalezca el derecho a la restitución de tierras de las víctimas de despojo y abandono forzado sobre las agendas de desarrollo como minería, explotación de hidrocarburos, agroindustria e infraestructura.
2. Establecer medidas que permitan la compatibilidad de la protección ambiental y la restitución de tierras.
3. Poner en marcha una política pública integral para la etapa del “posfallo” que cuente con una asignación de recursos suficientes que garantice su implementación, que parta de un sistema unificado de seguimiento a las sentencias judiciales y que dé prioridad a la ejecución de órdenes relacionadas con la restitución jurídica y material de tierras y territorios y las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro.
4. Hacer un seguimiento a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, la jurisdicción ordinaria penal y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).